

El bolsonarismo puede volver al poder

VALERIO ARCARY :: 28/05/2024

La lealtad política a los gobiernos dirigidos por el PT ha permitido ganar apoyos entre los más pobres. Pero la centroizquierda brasileña ha perdido la hegemonía sobre su base social

¿Puede Bolsonaro volver al poder en 2026? Sí, podría. Debemos considerar la existencia de poderosos factores objetivos y subjetivos para explicar la resiliencia de la extrema derecha, incluso después de la derrota de la semiinsurrección de enero de 2023.

Pero, en primer lugar, es lúcido reconocer el contexto internacional del fenómeno, en el que la extrema derecha cumple un papel instrumental: (a) las turbulencias en el sistema de Estados con el fortalecimiento de China y la estrategia del imperialismo estadounidense de preservar la supremacía de la Troika, para lo que resulta útil una orientación proteccionista más dura; (b) las disputas provocadas por la emergencia de la crisis medioambiental y la transición energética, que dejan en desventaja temporal a quienes se descarbonizan más rápidamente; (c) el giro de las fracciones burguesas hacia la defensa de regímenes autoritarios que enfrentan la protesta popular y abrazan una línea nacional-imperialista; (d) la tendencia al estancamiento económico y al empobrecimiento y giro a la derecha de las clases medias; (e) la tambaleante crisis de la izquierda, entre otras.

Pero hay peculiaridades brasileñas en la fragmentación política del país. Estas son esencialmente cinco (i) la hegemonía entre los militares y la policía; (ii) la gravitación de la gran mayoría del evangelicalismo pentecostal hacia la extrema derecha; (iii) el peso del bolsonarismo en las regiones más desarrolladas, el Sudeste y el Sur del país, especialmente entre la nueva clase media propietaria, o con altísima escolarización que cumple funciones ejecutivas en los sectores privado y público; (iv) el liderazgo de la corriente neofascista dentro de la extrema derecha; (v) la audiencia de la extrema derecha entre las clases medias asalariadas con salarios entre tres y cinco o hasta siete salarios mínimos.

Las cuatro primeras singularidades han sido ampliamente investigadas, pero la última menos. Estudiarla es estratégico, porque puede ser la única posible de revertir, en el contexto de una situación muy desfavorable de relaciones sociales de fuerzas todavía reaccionarias.

Hay factores objetivos que explican el alejamiento, la división o la separación política entre partes de la clase trabajadora y los más pobres, como la inflación de la educación privada y los planes de salud, y el aumento del Impuesto a la Renta, que son amenazas a un modelo de consumo y nivel de vida, y subjetivos, como el resentimiento social y el rencor moral-ideológico. Ambas están entrelazadas y tal vez sean incluso indivisibles.

Pero ese no era el caso cuando se abrió la fase final de la lucha contra la dictadura, hace cuarenta y cinco años. El PT nació apoyado en los obreros metalúrgicos, profesores públicos, trabajadores del petróleo, banqueros y otras categorías que, comparadas con la

realidad de las masas, tenían más educación y mejores salarios. El lulismo, o la lealtad política a la experiencia de los gobiernos dirigidos por el PT, permitió ganar apoyos entre los más pobres. Pero la izquierda, aunque mantiene sus posiciones, ha perdido la hegemonía sobre su base social de masas original. Esta trágica realidad, por tratarse de la fractura de la clase obrera, exige que la analicemos desde una perspectiva histórica.

El período de posguerra (1945/1981) de intenso crecimiento, en el que el PIB se duplicó cada década, y que favoreció la movilidad social absoluta en Brasil, acompañando la urbanización acelerada, parece haber quedado irremediabilmente en el pasado. El pleno empleo y el aumento de la escolarización, en un país donde la mitad de la población activa era analfabeta, fueron los dos factores clave para mejorar la vida de esta capa de trabajadores. Pero ya no ejercen la misma presión que en el pasado.

Está claro que en la última década, el capitalismo brasileño ha perdido impulso. Perdió el 7% de su PIB entre 2015/17 y, después de la pandemia de Covid en 2020/21, tardó tres años en volver a los niveles de 2019. A pesar de todas las contrarreformas antisociales - laboral, previsión social - destinadas a reducir los costes de producción, la tasa de inversión no superó el 18% del PIB en 2023, a pesar de la autorización del PEC de transición para incumplir el Techo de Gasto Público.

Brasil, el mayor parque industrial y mercado consumidor de bienes duraderos de la periferia, se ha convertido en una nación de crecimiento lento. El aumento de la escolarización dejó de ser un factor impulsor tan poderoso. Mejorar la vida se volvió mucho más difícil.

El Brasil de 2024 es un país menos pobre que en el siglo XX, pero no menos injusto. Por supuesto, sigue habiendo mucha pobreza: decenas de millones o incluso más siguen sufriendo inseguridad alimentaria, a pesar de la Bolsa Família, en función del ciclo económico. Pero ha habido una reducción de la pobreza extrema sin una reducción cualitativa de la desigualdad social.

La distribución funcional de la renta entre el capital y el trabajo registró variaciones en el margen. La distribución personal de la renta mejoró entre 2003 y 2014, pero ha vuelto a aumentar desde 2015/16, tras el golpe institucional contra el Gobierno de Dilma Rousseff. La pobreza extrema ha disminuido, pero la mitad de la población económicamente activa tiene ingresos no superiores a dos salarios mínimos. Un tercio de los asalariados gana entre tres y cinco salarios mínimos. La desigualdad se ha mantenido casi intacta porque, entre otras razones, la posición de los asalariados de renta media con mayores niveles de educación se ha estancado con un sesgo a la baja.

Numerosos estudios confirman que el aumento de la escolaridad media no está relacionado con la empleabilidad, y las encuestas del IBGE confirman paradójicamente que el desempleo es mayor a medida que aumenta la escolaridad. La mayoría de los millones de empleos firmados desde el final de la pandemia han sido para personas que ganan hasta dos salarios mínimos, con requisitos de escolaridad muy bajos.

Para evaluar la mayor o menor cohesión social de un país se consideran dos tasas de movilidad, la absoluta y la relativa. La tasa absoluta compara la ocupación del padre y del

hijo, o la primera actividad de cada uno con su último empleo. La tasa de movilidad relativa comprueba en qué medida los obstáculos para acceder a puestos de trabajo -u oportunidades de estudio- que favorecen el ascenso social, pudieron o no ser superados por quienes se encuentran en una posición social más baja.

En Brasil, tanto la tasa absoluta como la relativa fueron positivas hasta la década de 1980, pero la primera fue más intensa que la segunda. En otras palabras, experimentamos una intensa movilidad social en el período de posguerra debido a la presión de la urbanización y la migración interna, del Nordeste al Sudeste, y del Sur al Centro-Oeste. Pero esto ya no es así. Esta etapa histórica terminó en los años 90, cuando se agotó el flujo procedente del mundo agrario.

Desde entonces, la pobreza ha disminuido, pero los trabajadores de clase media han experimentado una realidad más hostil. Lo que explica este proceso es que las trayectorias de movilidad social de los últimos veinte años han beneficiado a millones de personas que vivían en la extrema pobreza, pero muy pocas han ascendido significativamente. Muchos han mejorado sus vidas, pero sólo han ascendido al escalón inmediatamente superior al que ocupaban sus padres.

La movilidad social relativa se ha mantenido muy baja, porque los incentivos materiales para aumentar la escolarización han sido menores en los últimos cuarenta años de lo que lo habían sido para la generación que llegó a la edad adulta en los años cincuenta o sesenta. Las recompensas que obtienen las familias por mantener a sus hijos sin trabajar durante al menos doce años hasta que terminan la enseñanza secundaria han disminuido en comparación con la generación anterior, a pesar de la mayor facilidad de acceso.

Un país puede partir de una situación de gran desigualdad social, pero si la movilidad social es intensa, la desigualdad social debería reducirse, aumentando la cohesión social, como ocurrió en la Italia de la posguerra. A la inversa, un país que tenía una desigualdad social baja en comparación con sus vecinos que ocupan una posición similar en el mundo puede ver cómo su situación se deteriora si la movilidad social se vuelve regresiva, como es evidente en la Francia actual.

En Brasil, contrariamente a lo que se suele pensar al respecto, la mayoría de los nuevos empleos de los últimos diez años no han beneficiado al sector más instruido de la población. Estudiar más no ha reducido el riesgo de desempleo. En los cuarenta y cinco años transcurridos desde 1979, la escolaridad media ha pasado de tres a más de ocho años. Pero se han producido dos transformaciones que han tenido un impacto duradero en la conciencia de la juventud obrera.

La primera es que el capitalismo brasileño ya no es una sociedad de pleno empleo, como lo había sido durante medio siglo. La segunda es que, incluso con los sacrificios realizados por las familias para mantener a sus hijos estudiando y postergando su entrada en el mercado laboral, la empleabilidad se ha concentrado en actividades que requieren poca escolarización y ofrecen salarios bajos. Por primera vez en la historia, los niños han perdido la esperanza de poder vivir mejor que sus padres.

El desempleo entre los que tienen estudios superiores es proporcionalmente mayor que

entre los que tienen estudios inferiores, y si la desigualdad de ingresos personales ha disminuido en los últimos quince años es porque el salario medio de los que tienen estudios medios y superiores ha ido bajando. La vertiginosa expansión de la uberización no es, pues, sorprendente. Las encuestas mensuales de empleo del IBGE en la región metropolitana de São Paulo indican una evolución muy lenta que sólo se aproxima, en el mejor de los casos, a la recuperación de la inflación.

Casi cuarenta años después del fin de la dictadura militar, el balance económico y social del régimen de democracia liberal es desalentador. Las reformas llevadas a cabo por el régimen, como la ampliación del acceso a la educación pública, la implantación del SUS (Sistema Único de Salud), la Bolsa Familia para los extremadamente pobres, entre otras, fueron progresistas, pero insuficientes para reducir la desigualdad social. La hipótesis de que una población más educada cambiaría gradualmente la realidad política del país, impulsando un ciclo sostenible de crecimiento económico y distribución de la renta no se ha confirmado.

Una forma de ilusión gradualista en la perspectiva de la justicia social dentro de los límites del capitalismo era la esperanza de que una población más educada cambiaría gradualmente la realidad social del país. Esto nos remite a los límites de los gobiernos de coalición liderados por el PT, que apostaron por la concertación con la clase dominante para regular el capitalismo «salvaje». Aunque existen correlaciones de largo plazo entre escolarización y crecimiento económico, no se han identificado causalidades directas que sean incontrovertibles, menos aún si incluimos la variable de la reducción de la desigualdad social, como lo confirma Corea del Sur.

Lo que sí es incontrovertible es que la burguesía brasileña se unió en 2016 para derrocar al gobierno de Dilma Rousseff, a pesar de la moderación de las reformas llevadas a cabo. No debería sorprendernos que la clase dominante no tuviera reparos en llegar al extremo de manipular el impeachment, subvirtiendo las reglas del régimen para tomar el poder para sus representantes directos, como Michel Temer. El desafío es explicar por qué la clase trabajadora no estaba dispuesta a luchar para defenderlo.

Los salarios representaban más de la mitad de la riqueza nacional a principios de la década de 1990 y, en los últimos treinta años, cayeron a poco más del 40% en 1999 y, a pesar de la recuperación entre 2004 y 2010, todavía hoy, en 2024, están por debajo del nivel del 50% de 2014. Esta variable es significativa para una evaluación de la evolución de la desigualdad social, porque el Brasil de 2024 es una sociedad que ya ha completado la transición histórica del mundo rural al urbano (el 86% de la población vive en ciudades), y la mayoría de los que trabajan bajo contrato, 38 millones con contrato laboral y 13 millones de funcionarios, reciben salarios.

Otros diez millones tienen empleador pero no contrato. Es cierto que todavía hay 25 millones de brasileños que viven del autoempleo, pero son proporcionalmente menos que en el pasado^[ii] En resumen: la distribución funcional de la renta entre el capital y el trabajo no ha mejorado. La burguesía no tiene motivos para quejarse del régimen liberal. Aun así, una fracción de la burguesía, como la agroindustria y otros, apoya al neofascismo y su estrategia autoritaria.

Los datos que indican que la desigualdad social ha disminuido entre los asalariados son convincentes. Pero no porque haya disminuido la injusticia, aunque sí la miseria. Este proceso se ha producido porque ha habido dos tendencias opuestas en el mercado de trabajo. Una es relativamente nueva y la otra es más antigua. La primera fue la subida de los pisos salariales de los sectores menos cualificados y menos organizados. El salario mínimo ha ido subiendo por encima de la desvalorización de forma lenta pero constante desde 1994 con la introducción del real, acelerándose en los años de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.

Se trata de un fenómeno nuevo, ya que en los quince años anteriores había ocurrido lo contrario. El salario mínimo es una variable económica clave porque es el piso de las jubilaciones del INSS, por eso la burguesía exige que sea desvinculado. La recuperación económica favorecida por el ciclo mundial de aumento de la demanda de materias primas permitió la caída del desempleo a partir del segundo semestre de 2005, culminando en 2014 en una situación de casi pleno empleo.

La distribución masiva de Bolsa Familia también parece haber ejercido presión sobre la remuneración del trabajo manual, especialmente en las regiones menos industrializadas. La segunda tendencia fue la caída continuada de la remuneración de los empleos que exigen estudios medios y superiores, un proceso que venía produciéndose desde los años ochenta. En conclusión: los datos disponibles parecen indicar que el aumento de la escolarización ya no es un factor importante de ascenso social, como lo fue en el pasado.

La lealtad política de las masas populares al lulaísmo es una expresión del primer fenómeno. La vida de los más pobres mejoró durante los años de los gobiernos del PT. La división entre los asalariados que ganan más de dos salarios mínimos expresa un resentimiento social que ha sido manipulado por el bolsonarismo. Si la izquierda no recupera la confianza en este sector de la fuerza de trabajo, el peligro para 2026 es grande.

Jacobinlat

<https://www.lahaine.org/mundo.php/el-bolsonarismo-puede-volver-al>